



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, veinticinco de abril de dos mil veintitrés

22-026

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante: **JAIME LOPEZ CARRANZA**
Demandado: **COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A**
Radicado No.: 05001-31-05-003-2018-00014-01.
Tema: ineficacia traslado
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**

Link: [22-026 \(003-2018-00014\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrado **MARIA NANCY GARCIA GARCIA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las todas partes contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

Se reconoce personería a la Dra. LINA MARIA ZAPATA BOTERO identificada con cédula de ciudadanía 1.035.850.617 y portadora de la Tarjeta Profesional 335.958 del C.S. de la J., en los términos de la sustitución de poder allegada por la Dra. MARICEL LONDOÑO RICARDO en calidad de representante legal de la firma Muñoz y Escurecía S.A.S., para que continúe representando los intereses de Colpensiones.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 12** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. **SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**
- 1.1. **LO PRETENDIDO**

Solicita el demandante, que tras la declaratoria de **NULIDAD y/o INEFICACIA** del traslado a las administradoras del RAIS, se tenga como válidamente afiliado al régimen de prima media con prestación definida, ordenándose a Protección S.A. y Porvenir S.A. trasladar a COLPENSIONES todos y cada uno de los aportes, junto con los rendimientos y sin ningún descuento por cuota de administración, última que debía recibir dichos conceptos, actualizando la historia laboral.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que nació el 20 de diciembre de 1961.
- ✓ Que en febrero de 1986 se afilió al ISS donde cotizó hasta noviembre 1994.
- ✓ Que en mayo de 1995 se trasladó a Protección S.A., en la que cotizó 30 semanas contabilizadas a diciembre de esa anualidad.
- ✓ Que en enero del año 1996 regresó al RPM y estuvo en el mismo hasta marzo de 2009, acumulando un total 781.29 semanas cotizadas.
- ✓ Que en mayo de 2009 se trasladó a Porvenir S.A.
- ✓ Que sus traslados al RAIS se dieron porque los asesores manifestaron que las condiciones para acceder a la pensión de vejez eran mucho más favorables, eran entidades que contaban con respaldo económico, y que debido a cambios legislativos el ISS se iba a acabar, pero sin brindarle una información técnica, adecuada, cierta, completa y comprensible de cara a la complejidad del manejo de sus aportes, ni efectuar alguna proyección pensional (continúa enlistando los aspectos que nunca le explicaron dichos asesores).
- ✓ Que a la fecha de presentación de la demanda contaba con 56 años de edad.
- ✓ Que para el año 2017 contaba con un total de 1.230 semanas cotizadas.
- ✓ Que el 10 de agosto de 2017 por medio de derecho de petición, solicitó a Colpensiones que realizará el traslado del RAIS al RPM, súplica despachada desfavorablemente cinco días después mediante comunicado de radicación BZ2017_8347006-2126048, petición que en similar sentido radicó el 8 de agosto de 2017 ante Porvenir S.A y la Protección S.A., también resuelta en forma negativa.
- ✓ Que en Porvenir S.A. se pensionaría con \$1.011.300 y que en Colpensiones su mesada ascendería a \$4.214.325.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtieron las entidades demandadas el derecho pretendido. Inicialmente se pronunció COLPENSIONES indicando que únicamente le constaba las semanas cotizadas en el RPM, la edad

del accionante, la calidad de afiliado al extinto ISS y la respuesta a la solicitud elevada ante a esa entidad, respecto de los demás hechos indicó que no le constaban al tratarse de afirmaciones contenidas en contra de un tercero. Por su parte Porvenir S.A., en similares términos a lo planteado por Protección S.A., negó el incumplimiento del deber de información, pues ambas señalaron que brindaron una asesoría adecuada, objetiva, clara, comprensible, con concreta, veraz y necesaria acerca de las características, funcionamiento y diferencias de cada régimen, reseñando algunos aspectos, en los que por demás eran instruidos los asesores, y que el demandante había firmado de manera libre y voluntaria el formulario de afiliación con cada entidad.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 17 de noviembre de 2020, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín declaró que PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.:

- Faltaron a su obligación de dar información veraz, completa y oportuna al actor y de verificar las condiciones particulares y personales de este, al momento del traslado, y a lo largo de la permanencia en la afiliación de dichas entidades.
- Causaron grave perjuicio económico en su acceso real y efectivo a la seguridad social en pensiones.
- Eran responsables profesional y constitucionalmente del perjuicio causado.

En igual sentido, declaró la INEFICACIA por inaplicación constitucional de pérdida del régimen de prima media con prestación definida al momento del traslado al RAIS y consecuentemente que el actor seguía inmerso en el RPM, pero a cargo de la AFP PORVENIR S.A.

ABSOLVIÓ de todas las pretensiones a Colpensiones, sin perjuicio del cumplimiento de las órdenes que le impartiría.

En virtud de lo declarado, ordenó lo siguiente:

- A la AFP PORVENIR S.A. reconocer la PENSIÓN DE VEJEZ al demandante dentro del mes siguiente a la fecha que éste lo solicitara por escrito, bajo los parámetros del régimen de prima media, petición con la que debía adjuntar certificado de retiro laboral.

- A Porvenir S.A. solicitar a Colpensiones, al mes siguiente de pagar la prestación a la accionante, la elaboración del cálculo actuarial pensional, con miras a la subrogación pensional.
- A Colpensiones que dentro de los dos meses siguientes a dicha petición, elaborara el cálculo aludido, presentándoselo a Porvenir, quien a su vez debía pagarlo en el mes siguiente, monto que podía financiar con el dinero de la cuenta de ahorro individual (cotizaciones, rendimientos, bono pensional u otros haberes). Preciso que mientras ello no sucediera continuaría reconociendo la pensión al actor; efectuado el pago le correspondería a Colpensiones su otorgamiento.
- Autorizó a Porvenir para que, dentro del mes siguiente de haber pagado el cálculo actuarial, solicitara el reembolso del 7% de ese dinero a Protección S.A., última entidad que a su vez debía cancelarlo dentro del mes siguiente.

Finalmente condenó en costas a PORVENIR S.A. fijando como agencias en derecho la suma de \$3.552.200 a favor del actor.

Dentro del término concedido por la ley, todas las partes interpusieron y sustentaron recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR

Comenzó por recordar que existían principios jurídicos, que como parte del ordenamiento, fundaban el sistema normativo, destacando el de eficacia de los derechos sociales fundamentales o ineficacia del acto jurídico que atentara contra este, explicando que era deber de cualquier autoridad, incluso judicial, proteger el acceso real y efectivo al mismo, entre ellos el derecho a la seguridad social en pensiones, por lo que de observarse que una persona había perdido la posibilidad real y efectiva de acceder a este derecho, esa autoridad debía garantizarlo, incluso de manera oficiosa, al ostentar el carácter de irrenunciable, inajenable e inherente al ser humano, claro está, si se acreditaba dicho perjuicio.

Posteriormente analiza las diferencias entre nulidad e ineficacia, de cara a las obligaciones de los fondos, los que NO tenían una obligación de resultado, pero sí de buen consejo como sociedades fiduciarias, responsabilidad de carácter profesional, correspondiéndoles suministrar una información clara, veraz y oportuna.

Fue así como advirtió que conocido era el principio de la responsabilidad según el cual quien causara un daño con su acción u omisión debía repararlo, omisión que devenía del incumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 720 de 1994, que contemplaba obligaciones del gestor fiduciario, debiendo asumir la AFP del RAIS las consecuencias dañosas, no así Colpensiones que era un tercero ajeno a ese acto jurídico, destacando además que la actividad financiera de la AFP era altamente onerosa, tornándose improcedente simplemente ordenar el regreso automático a Colpensiones por esa falta al deber de información, pues realmente equivaldría a un enriquecimiento sin causa de la AFP dado el conglomerado económico al cual pertenecía, viéndose beneficiada de su propia negligencia o descuido, precisamente por eso algunas se allanaban, de ahí que debía retornar un cálculo actuarial que cubriera las diferencias en cuanto al reajuste, dejando indemne el derecho al mínimo vital del afiliado, situación que se concordaba con lo normado en el art. 271 de la Ley 100 de 1993, referente a que la selección de régimen quedaba sin efecto pudiendo afiliarse a prima media por violentar la libertad de escogencia.

2.2. RECURSOS DE APELACIÓN

2.2.1. PORVENIR S.A.

Se opuso a la declaratoria de ineficacia, así como las consecuencias que de ello derivó el a quo.

Tras recordar la condena impuesta, menciona que no existe normatividad al respecto sobre intercambios financieros y aunque se traiga a colación normatividades sobre permutación o conmutación, las mismas preceptivas eran aplicables a empleadores y personas naturales y no entre fondos pensionales, como bien se cita en el artículo 41 de la Ley 550 del 99, en la cual se regula el tema de subrogación entre el empleador omisivo. De igual manera mencionó los artículos 34 de la Ley 1116 de 2006 y el 133 de la Ley 100 de 1993.

Señaló que el fallo estaba basado en una normativa totalmente inaplicable, puesto que, para los procesos de ineficacias existía un precedente y aunque el juez era autónomo en sus decisiones, se alejó de este y su actuar no guardó consonancia con los hechos y las pretensiones, lo cual representó una condena excesiva y contraria a la normatividad vigente, ya que, por vía de la misma, el a quo modificó la forma en la que se reconoce esta prestación en el RAIS.

Alegó que el operador desconoció la coexistencia de dos regímenes pensionales, los cuales tenían una forma diferente de financiar las prestaciones, de ahí en virtud de la ley y las entidades

supervisoras, NO se podía dar una destinación diferente a esos recursos de la seguridad social sino conforme con las normas preexistentes. Añadió que el juez empleó unos ejemplos normativos que no están consagrados por la ley como consecuencia por no cumplir con el deber de información, siendo una aplicación indiscriminada de fragmentos normativos, lo que se observó como una clara desatención al principio de insensibilidad de la norma.

Agregó que el fallo se encuentra en contraposición del principio de congruencia, principio que debía entenderse como una garantía del debido proceso para las partes, a través del cual se aseguraba que el juez sólo se pronunciaría respecto a lo discutido y no de forma extra ni ultra petita, y en este caso tomó una decisión sin tener en cuenta las pretensiones y excepciones probadas, vulnerando la defensa de la AFP.

Para concluir, mencionó que una proyección de una mesada pensional en uno u otro régimen, no podía ser objeto de reproche para endilgarse una falta de información al momento del traslado, máxime si dicha diferencia prestacional no era imputable al fondo, ni la fluctuación de las prestaciones a futuro era una causal para configurarse una transgresión a los artículo 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, sobre el acceso real y efectivo de los derechos pensionales que bien fue argumentado por el juez; además recordó que el afiliado ratificó su decisión de estar en el RAIS, pues realizó múltiples traslados entre las diferentes administradores del RAIS, lo cual evidenciaba que no existió una falta de información, insistiendo que la diferencia prestacional en los regímenes no podía asimilarse a una desmejora en el mínimo vital del accionante.

En dichos términos solicita que se revoque la condena y en su lugar se absuelva a Porvenir S.A.

2.2.2. RECURSO DE APELACIÓN PROTECCION S.A.

Se opuso a la devolución del 7% a favor de Porvenir S.A. sobre el cálculo actuarial ordenado por el a quo.

Menciona que el demandante no se encuentra afiliado desde hace 24 años en esta AFP, y solo registró 30 semanas de cotización durante los dos años que se encontró afiliado, de igual manera, después de estar vinculado con esta AFP, retornó al RPM dejando saldada cualquier cuenta pendiente entre las partes, pues trasladó la totalidad del dinero de la cuenta de ahorro individual al momento de cambiarse el actor a la AFP Porvenir.

Expuso que la Ley 100 de 1993, en el artículo 12, regulaba dos regímenes pensionales excluyentes, prima media y RAIS, regidos por características completamente diferentes, siendo selección del afiliado someterse a una u otras reglas, otorgando el legislador como garantía que dicha selección fuera libre y voluntaria conforme a los artículos 13 y 271 ibídem, preceptivas según las cuales, el desconocimiento de este derecho, daba lugar a la aplicación de las sanciones establecidas, es decir, que la afiliación respectiva quedaría sin efectos, contexto bajo el cual surgía el deber los fondos privados, a quienes les competía garantizar que la toma de la decisión de los afiliados, además de libre y voluntaria, estuviese precedida por una información clara, completa y veraz que le permitiera entender las reglas pensionales a las que se someterían, carga que asegura haber cumplido.

Que de conformidad con el precedente de la Corte Suprema de Justicia, las consecuencias de la declaratoria de la ineficacia es que las cosas debían volver al estado en que se encontraban antes del traslado, lo que implicaba que el demandante conservaría su estado de afiliado al RPM y posteriormente las AFP retornarían a Colpensiones los valores correspondientes a las cotizaciones al sistema, junto con los respectivos rendimientos, lo que ya cumplió en año 1996 cuando el demandante se trasladó a Porvenir.

Además, corresponde a quien lo pide, acreditar el daño y nexo causal, así como la conducta del tercero, presentando además el juramento estimatorio, que en parte alguna de la demanda se observaba. De ahí que a ningún perjuicio podía condenarse, insistiendo que NO comportó una pretensión y además tampoco se acreditó, óptica bajo la cual, se había vulnerado el derecho al debido proceso.

Que imponer dicha carga a los fondos privados resultaba excesivo, ilegal e inconstitucional. Ilegal porque se desconocía totalmente la naturaleza del RAIS establecida en la Ley 100 de 1993 con sus posteriores reformas. Inconstitucional porque las normas del régimen de ahorro individual fueron declaradas exequibles mediante C-086 de 2002, por lo que las mismas eran ajustadas a la Constitución Política Colombiana.

Que aunado a ello, se estaría vulnerando el principio de la estabilidad financiera estatuido en el art. 48 de la Constitución Política, ya que la pensión de vejez se liquida de manera totalmente diferente en ambos regímenes y los requisitos establecidos no se podían equiparar, de ahí que la condena fuese excesiva, trayendo como consecuencia necesaria que las AFP asuman de su propio patrimonio las condenas, lo que llevaría inevitablemente a su insolvencia, ya que el patrimonio de la administradora era diferente al de los fondos que administra, precisamente las pensiones de vejez en el RAIS se

financiaban con los ahorros de la cuenta de ahorro individual de los afiliados, junto los rendimientos y con el bono pensional si a ello hubiere lugar.

2.2.3. RECURSO DE APELACIÓN COLPENSIONES

Solicitó la revocatoria de la declaratoria de ineficacia. Comenzó mencionando que, aunque Colpensiones era un tercero absoluto y el asunto debatido no debía perjudicarlo, en el fondo las decisiones tomadas y sus efectos, lo que hacen es imponer cargas que la misma no estaba obligada de soportar como el hecho de reactivar una afiliación al RPM.

Así mismo, dijo que la Corte Suprema de Justicia desconoció el precedente constitucional al valerse de manera generalizada de la presunta ignorancia de la ley por parte de los afiliados, al considerarlos como parte débil, legos, inexpertos, desconociendo así que el error de derecho, no era justificable en los negocios jurídicos. Cita apartados del salvamento de voto realizado por el magistrado Jorge Luis Quiroz en sentencia con radicado N°68852.

De igual manera, alegó que la orden sobre la elaboración del cálculo actuarial con miras a la subrogación pensional, generaría que la entidad desplegara un ejercicio logístico, contratando a profesionales actuariales, lo que resultaría costoso pero necesario para cumplir las órdenes impartidas, ello sin mencionar el costo de la defensa jurídica en este tipo de procesos.

Destacó que el accionante, en la mayoría de su vida laboral, no aportó al sostenimiento del régimen, lo que conllevaba un detrimento patrimonial paulatino de Colpensiones, pues en un futuro no muy lejano, el desfinanciamiento llegaría a un punto de afectar el pago de las prestaciones

Añadió que la imposición de recibir a estos afiliados implicaría asumir los costos de la representación judicial y los perjuicios, por el reconocimiento de un derecho pensional sin haber realizado previamente las proyecciones o cálculos actuariales que representan el pago de una eventual prestación. Que sobre el mismo aspecto se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia T-489 de 2010 atiente a la sostenibilidad económica.

Finaliza su intervención indicando que ante un traslado libre y voluntario, NO podía soportar las consecuencias de actos de terceros, habiendo obrado de buena fe Colpensiones.

2.2.4. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDANTE

Solicita que se aplique la jurisprudencia actual respecto a las consecuencias de la ineficacia.

Mencionó que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado de una manera pacífica frente a estos temas, criterio que en igual sentido acogió el Tribunal Superior de Medellín, como en la sentencia SL-42296 o SL-38849, las cuales hacen referencia a que la ineficacia jurídica es muy diferente a lo que antes se denominaba como la nulidad del traslado, primer evento en el que se entendía que todos los actos que se generaron con posterioridad a este hecho jurídico, se entienden inexistentes, en este caso aportes, rendimientos, seguros etc. volviendo a su estado anterior y tal estado para el accionante es que pertenecía al RPM.

2.3. ALEGATOS

Presentaron alegatos las AFP Protección S.A, Porvenir S.A y Colpensiones, las dos primeras entidades reiteraron los argumentos expuestos en los recursos de alzada y solicitaron que se revoque la decisión proferida por el juez de primera instancia, centrándose Protección S.A. en la improcedencia de la concesión de unos perjuicios cuando NO existía un daño cierto o real; Porvenir abordó asuntos como la nulidad, los reales efectos de la declaratoria de ineficacia, la limitación de las competencias del juez de instancia, los valores que eventualmente le correspondería retornar.

Por otro lado, Colpensiones recalcó que era inadmisibles la teoría de inaplicabilidad constitucional, pero adujo que tampoco era procedente declarar la ineficacia del traslado y que en caso de ordenarse acoger al demandante nuevamente en el RPM, debía ordenarse tanto a Porvenir como a Protección, devolver todos los aportes realizados por el accionante en los términos aludidos por la Corte Suprema de Justicia, además del cálculo actuarial de no resultar suficiente el dinero para pagar la totalidad de la pensión de vejez, debidamente indexados.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

De acuerdo a lo planteado en los recursos de alzada, el problema jurídico consiste en determinar cuáles son los efectos jurídicos que genera el incumplimiento del deber de información, analizando no sólo si es dable declarar la ineficacia de la afiliación del demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad,

examinando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia, sino además establecer la viabilidad de la indemnización de perjuicios, analizando si se acreditó el daño, la responsabilidad de la AFP y el nexo causal, y a su vez si ello cimenta la procedencia del pago de un cálculo actuarial en los términos ordenados por el fallador, determinando además qué haberes le corresponde retornar a Porvenir S.A. y Protección S.A. y si la primera de las entidades aludidas está encargada de asumir transitoriamente el pago de una pensión por vejez pero en los términos regulados para el régimen de prima media.

No obstante, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de alzada, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

4. CONSIDERACIONES

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado.*** (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho;

y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.* (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales,

ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA EL DEMANDANTE	Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarlo
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta al actor afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por el demandante, se desprende, de un lado, que para la época del traslado inicial al RAIS, concretamente 14 de diciembre de 1994 cuando suscribió el formulario de vinculación a ING (ahora Protección S.A.) y en 1996 a Porvenir (fls. 125 y 127 del archivo 01 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía a la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía el actor respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado por el nuevo empleo que había conseguido, pero sin tener realmente conocimiento sobre cómo funcionaba el nuevo régimen.

Y es que expresamente el señor JAIME LOPEZ CARRANZA en el aludido interrogatorio manifestó que es técnico de mantenimiento de ferrocarriles de servicios en Drummond Ltda. Respecto de su traslado al RAIS en cabeza de la AFP Protección S.A., adujo que consiguió un empleo en una empresa en la cual se sentía muy bien y que llegaron unos señores *encorbatados* con portafolios y el formulario, le dijeron *firmé aquí* y él lo hizo sin realizar ninguna pregunta; añadió que transcurrieron aproximadamente 10 minutos en el encuentro con estos asesores, pero que lo único que le solicitaron fueron sus datos personales. Que en ningún momento el asesor le explicó sobre el monto de dinero que tenía que ahorrar y tampoco acerca de los rendimientos.

Sobre la MOVILIDAD indicó que se pasó a Porvenir S.A. cuando unas *muchachas jóvenes y lindas se aparecieron en su casa* y le dijeron que se montara a un carro para llevarlo hasta la entidad y estando allá firmó, pero no lo asesoraron en ningún momento.

Destáquese de lo expuesto, que el demandante NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó la existencia de una explicación por parte de los asesores.

En todo caso, en gracia de discusión, lo indicado por el reclamante dejar ver que no existió información suministrada al momento suscribir el formulario de vinculación al RAIS, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión en un monto mayor en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si este es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se le habló de modalidades de pensión, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, aunado a la incidencia de factores externos impredecibles a futuro (composición del grupo familiar, fluctuación de los IBC y variación del mercado, etc) haciéndole un estimativo de cuánto dinero se requería sólo para financiar un salario mínimo, panorama bajo el cual entendería la necesidad de planear su futuro pensional para acceder a una cuantía mayor, pero tal aspecto también se omitió, o por lo menos, se insiste, no se acreditó lo contrario.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por el accionante, pues se insiste, que no le dieron explicación alguna sobre el funcionamiento del régimen.

Visto, así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto, es decir, en cuanto a la declaratoria de ineficacia, NO así los efectos que de ello derivó el juez.

Y es que aquel considera que el afiliado verá truncado su derecho a disfrutar de una prestación en un monto superior, dado que habría una eventual reducción en la pensión por vejez que recibiría de permanecer en el RAIS, en contraste con aquella ofrecida por el régimen de prima media.

No obstante, al margen de que por sí sólo eventualmente ello pudiese o no acarrear la indemnización de un perjuicio, lo cierto es que NO hay prueba que soporte la veracidad de tal aseveración, ni siquiera un cálculo a título ilustrativo, en contraste con lo que mal o bien, se identifica en los anexos de la demanda respecto al eventual monto que en un futuro percibiría en dicho fondo, ello sin miramientos a la precisión que pudiese tener dicho cálculo dado los errores en el establecimiento y/o cuantificación del IBL de cara a las cotizaciones efectuadas no sólo en el transcurso de la demanda, sino además con posterioridad a la sentencia que, de existir, afectarían cualquier cuantificación primigenia.

Aunado a lo anterior, habrá de señalarse que, en parte alguna, se acreditó que la administradora del RAIS hubiese brindado una errada información al actor al momento de afiliarse, siendo carga de quien aduce un perjuicio, demostrar no sólo su existencia, sino que el mismo está ligado a tal actuar, es decir, ese nexo de causalidad, pues aunque quisiese asimilarse el daño al menoscabo en la tasa de reemplazo, ello no releva de la actividad probatoria que en tal sentido se debe desplegar, actividad que precisamente NO ejecutó porque NO era una pretensión.

Y es que la ineficacia aquí declarada, no deviene de tal hecho, es decir, del actuar negligente de la entidad, ni de que se hubiese configurado un error de hecho en la naturaleza del acto o en la identidad de la cosa como vicio en el consentimiento, tal ineficacia nace de la omisión de la AFP en cuanto a no cumplir la carga de la prueba que el precedente judicial ha radicado en cabeza suya, es decir, se cimenta en el hecho de que el fondo no demostró la calidad de la asesoría que en su momento brindó al afiliado.

Así las cosas, si se desconocen los pormenores de la misma, no puede tildarse de indebida o irregular, por lo que el eventual perjuicio que alega el fallador, partiendo de la idea que se hubiese demostrado un daño, no puede indefectiblemente desprenderse de tal asesoría en la que el demandante decidió trasladarse de régimen, asesoría cuyo contenido integral se desconoce, pues lo dicho por el accionante en el interrogatorio de parte absuelto, tiene como finalidad provocar una confesión, no acreditar un hecho.

Incluso, de hablarse de la existencia de un daño, el mismo NO podría endilgársele a una administradora disímil a la primigenia, de ahí que la eventual responsable de asumirlo sería Protección no así Porvenir.

En todo caso, aunque tal tesis no fuera de recibo, a igual conclusión llegaría esta Magistratura.

Y es que realmente se torna innecesario entrar en disquisiciones puntuales en torno a la acreditación o no de un eventual perjuicio respecto del futuro pensional de un afiliado, toda vez que aunque pudiesen resultar interesantes los planteamientos del a quo, lo cierto es que son otras las consecuencias que nuestro órgano de cierre ha derivado en este tipo de asuntos, el que propende por la declaratoria de ineficacia junto con el retorno de ciertos haberes como más adelante se pasará a explicar, de ahí que siguiendo este precedente consecuentemente se entienda que la persona permanece en el régimen primigenio, siendo Colpensiones y no otra entidad la encargada de asumir el reconocimiento integral de la futura prestación por vejez en caso de acreditarse el cumplimiento de los requisitos que contempla la ley, sin que pueda en este caso mantenerse la condena a la prestación,

aún en cabeza de la administradora del régimen de prima media, toda vez que en parte alguna se solicitó su reconocimiento en el libelo genitor, tampoco fue un hecho discutido, de ahí que, tras la emisión de esta sentencia, le corresponda a la parte elevar la correspondiente reclamación administrativa para efectos de analizarse su procedencia.

Ha de agregarse que ninguna variación genera la **MOVILIDAD** entre diferentes administradoras del RAIS que se presentó en el caso del señora JAIME LOPEZ CARRANZA, quien el 14 de diciembre de 1994 se vinculó a ING (hoy Protección S.A), y luego se trasladó a Porvenir el 26 de marzo de 1996, conforme se aprecia en los respectivos formularios de solicitud de afiliación y en el reporte del SIAFP (fl. 125, y 127 del archivo 01 del expediente digital), última entidad en la que actualmente permanece. Lo anterior por cuanto, de un lado, importa es examinar lo acontecido al momento de cambiar de régimen, y de otro lado, cuando hay movilidad entre fondos privados, la asesoría NO suele referirse a las características del sistema de prima media, mucho menos a las implicaciones del cambio de sistema pensional, dado que son otras circunstancias las que se resaltan; no es lo mismo promover el cambio de una administradora a otra, a promover un cambio de régimen pensional, pues en el primer caso, por regla general, sólo se publicita la rentabilidad de uno u otro fondo, aunque NO es ello precisamente lo que ocurrió en este evento, dado que a voces del actor, ninguna información relevante le suministraron.

En todo caso, si las AFP incumplieron su deber de información y por consiguiente debe declararse la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, esa determinación implica privar de todo efecto práctico al traslado, por lo que mal haría esta Magistratura en siquiera pensar o asimilar una MOVILIDAD entre administradoras del RAIS, a una convalidación, por definirlo de alguna manera, de un acto jurídico que nunca existió.

Fue precisamente este el raciocinio de la Sala de Casación Laboral en sentencia de radicación SL4705-2021, cuando recalcó que:

En consonancia con lo antes señalado, debe resaltar la Corte que, desde la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, se ha sostenido que, una vez acreditada la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual, **el acto jurídico no se torna en eficaz por los cambios que los afiliados hagan entre administradoras privadas** lo que ha sido reiterado entre otras en las providencias CSJ SL2877-2020, CSJ SL1942-2021 y CSJ SL1949-2021

El anterior criterio es el que se encuentra vigente en la jurisprudencia de la Sala; motivo por el cual se recoge cualquier otro que le sea contrario y, frente a la cual se advierte que, como la declaratoria de ineficacia del traslado tiene como sustento el incumplimiento del deber de información en el traslado inicial, **al estar afectado el acto jurídico primigenio, los negocios jurídicos subyacentes adolecen de igual afectación**, entre ellos los traslados que se efectúen a los diversos fondos privados, ello en tanto que, el efecto de la declaratoria de ineficacia es volver al statu quo, lo que implica retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el cambio de sistema pensional no hubiera existido jamás (CSJ 4025-2021, CSJ SL4062-2021, CSJ SL 4064-2021, entre muchas otras).

Luego entonces, para la Sala es claro que, en el presente asunto ni de la afiliación inicial, como tampoco de los traslados posteriores entre los diferentes fondos privados se evidencia que se hubiese recibido una información integral, completa y oportuna que brindara una ilustración respecto de las características, condiciones del mercado, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las contingencias financieras que tal decisión supondría en su derecho o como se dijo en la sentencia CSJ SL 6 oct.2021, rad.83576 « no prueba por sí mismo y mucho menos genera una especie de presunción relativa a que la voluntad reflexiva de la persona afiliada al materializar su acto de traslado de régimen pensional y de los posteriores tránsitos entre administradoras estaban nutridos con la debida ilustración en los términos explicados, ni así lo ha previsto el legislador».

Por lo tanto, la Sala insiste y reitera que **el solo hecho de que el afiliado se traslade en varias oportunidades dentro del RAIS, no puede convalidar, ni suplir el incumplimiento del deber de información por parte de la AFP al momento del traslado inicial** y los traslados posteriores, así como tampoco resulta ser evidencia de que el afiliado fue informado debidamente en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia y, menos aún puede considerarse que dicha circunstancia modera las consecuencias que ello supone en la eficacia del acto jurídico celebrado; todo esto bajo el contexto de que en el proceso quede por establecido que efectivamente el demandante no fue debidamente informado. (Resaltos de la Sala)

Y es que la aludida ineficacia realmente implica es que la administradora del RAIS accionada, traslade a COLPENSIONES **todos** los valores que hubieren recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, de lo contrario Colpensiones no estaría recibiendo la totalidad del dinero que se debe retornar conforme el claro el precedente sentado por nuestro órgano de cierre, punto en el que se MODIFICARÁ la decisión adoptada por el a quo, quien tras exponer sus razones, ordenó a Porvenir devolver cualquier valor que hubiese ingresado a la cuenta de ahorro individual de la demandante, contexto bajo el cual dicha orden sólo incluiría el retorno de cotizaciones y rendimientos, más NO la totalidad de los ítems, dado que también comprende los componentes de los gastos de administración, lo que sí se efectuará en la parte resolutive de esta providencia, extendiéndose tal orden a Protección S.A. por el lapso en que el demandante estuvo vinculado a ING, dineros que por demás serán debidamente indexados por cada entidad, teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula: $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$. Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Y es que cuando se presenta MOVILIDAD, es decir, la persona se traslada entre distintas administradoras del RAIS, se considera necesario señalar que tal obligación respecto de los valores a retornar NO debe recaer exclusivamente en cabeza de la última entidad afiliadora en que estuvo, como

en este caso lo es Porvenir S.A., ni mucho menos se circunscribe al tiempo en que la persona estuvo en ese último fondo, de ahí que el retorno de los gastos de administración se extienda respecto de la época en que permaneció en ING, hoy Protección.

La Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(…) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el

artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...)Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que el demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES, máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Empero, ello NO quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasarán al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

De otro lado, respecto a la INDEXACIÓN de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente **ADICIONAR** el fallo toda vez que tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debe ser entregados a Colpensiones debidamente indexado por parte de Porvenir S.A. y Protección S.A. teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula: $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital}$ – capital. Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

La Sala de Casación Laboral también se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021.

Por último, resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltese las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021¹, al momento de cumplirse la orden impartida, ambas administradoras del RAIS accionadas deberán discriminar los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados.

En tal sentido, deberá REVOCARSE la orden del fallador en cuanto a la declaratoria de causación de un daño por parte de Porvenir y Protección, consecuencialmente todo lo atinente al pago del cálculo actuarial/título pensional a título de indemnización por perjuicios y la prestación por vejez, pensión que ordenó reconocer a Porvenir en los términos regulados para el régimen de prima media, pese a que, se insiste, no se efectuó algún debate en cuanto al cumplimiento de los requisitos para acceder a tal prestación de cara a lo previsto en la Ley 797 de 1993, precisamente porque ello no comportó una pretensión.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA PARCIALMENTE** en cuanto a la declaratoria de ineficacia, **modificándola y revocándola** en los aspectos antes aludidos.

Sin costas en esta instancia, dado que todas las partes apelaron y tuvieron éxito parcial en el recurso, dado que, entre otros, su disenso se enfocó en los efectos de la declaratoria de ineficacia.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

¹ Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2020 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor **JAIME LOPEZ CARRANZA** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 18.967.359 contra **PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES**.

SEGUNDO: se **REVOCA** la declaratoria de causación de un daño por parte de Porvenir S.A. y Protección S.A. y consecuencialmente todo lo atinente al pago del cálculo actuarial/título pensional a título de indemnización por perjuicios y eventual otorgamiento de la pensión de vejez en los términos estipulados para el régimen de prima media.

TERCERO: se **MODIFICA** el fallo bajo el entendido que Porvenir S.A. trasladará a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del demandante, devolución que abarcará los tres ítems que componen los gastos de administración, última orden que también se extiende a Protección S.A. respecto de los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima que recibió durante el tiempo que el actor permaneció afiliado a ING; montos que serán debidamente INDEXADOS por ambas administradoras del RAIS al momento del pago, oportunidad en la que además deberán discriminar los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Sin costas en esta instancia

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA


MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA


MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL

SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante:	JAIME LOPEZ CARRANZA
Demandado:	COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y PROTECCION S.A.
Radicado No.:	05001-31-05-003-2018-00014-01.
Tema:	ineficacia traslado
Decisión:	MODIFICA SENTENCIA
Fecha de la sentencia:	25/04/2023

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 26/04/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario